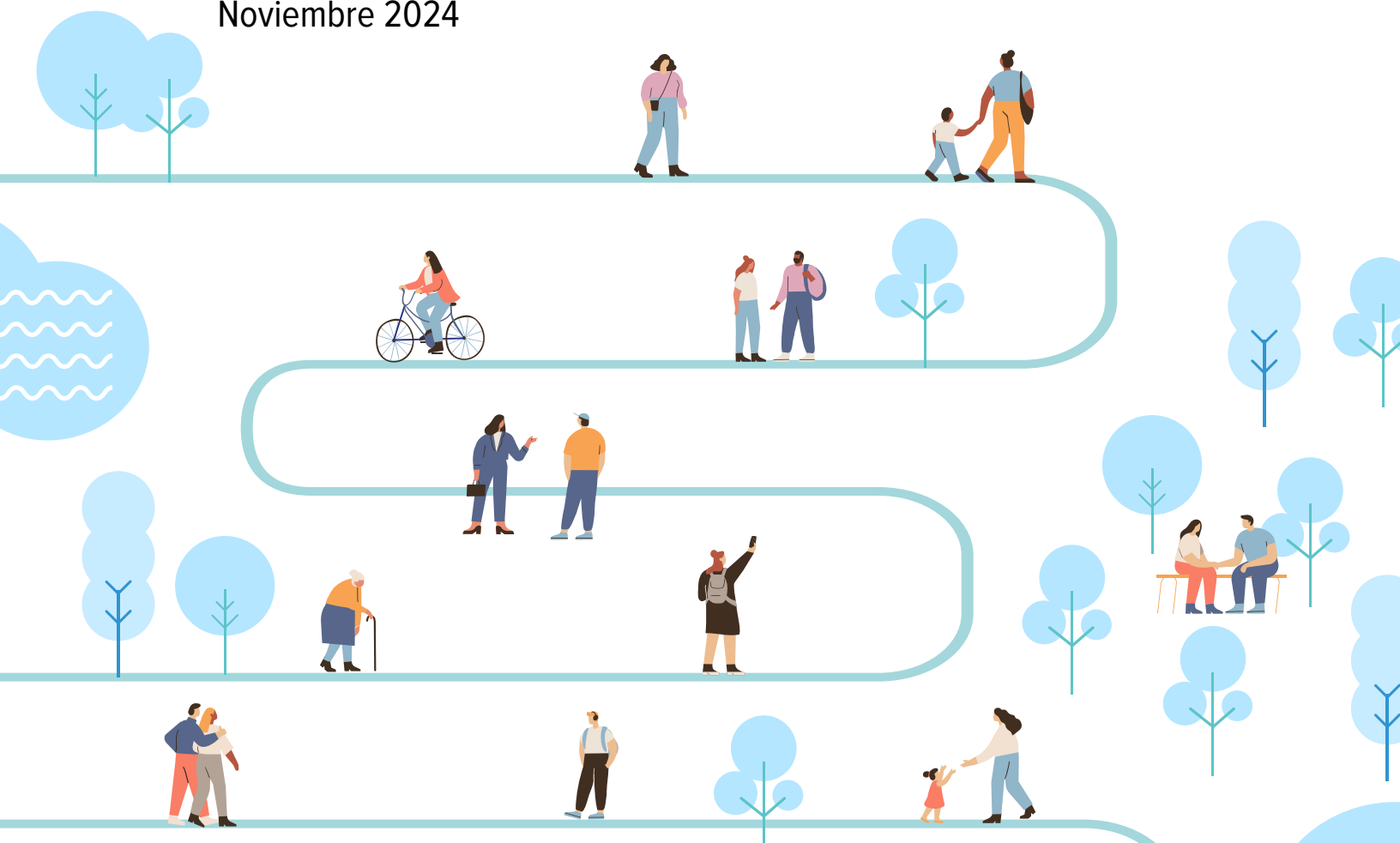


Seguridad ciudadana como pilar de la agenda renovada de desarrollo y democracia en América Latina y el Caribe

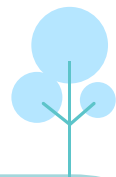
Aportes desde el PNUD, la Fundación Carolina, IDEA Internacional y SEGIB para la XXIX Cumbre Iberoamericana de jefes y jefas de Estado

Noviembre 2024



“La seguridad ciudadana preocupa a muchos tomadores de decisión y repercute al calor de las campañas electorales. No es de extrañar que el tema haya escalado en América Latina y el Caribe hasta convertirse en la principal preocupación pública en muchos países. El nivel de inseguridad que muchos sufren en la región impide el desarrollo humano. Pese a las mejoras sociales, la región sigue siendo la más desigual y la más insegura del mundo.

No hay una fórmula mágica y única para resolver el problema, pero la inseguridad sí tiene remedio. Los avances en materia de seguridad ciudadana no resultan de una sola política aislada, sino de un enfoque multisectorial y de una serie de políticas que incluyan medidas de prevención, reformas institucionales, inversión pública suficiente, cambios en la relación entre Estado y comunidades, voluntad política amplia y sostenida, y la adopción de sistemas de información y de intervención más modernos y eficaces”¹.



¹ PNUD (2013). Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina. Extraído de: www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/informe-regional-de-desarrollo-humano-2013-2014

1. Introducción



La seguridad ciudadana es la base para crear sociedades inclusivas y sostenibles, donde cada persona pueda vivir sin temor, ejercer plenamente sus derechos y contribuir activamente al desarrollo.

La violencia y la inseguridad relacionadas con actividades criminales constituyen una de las principales amenazas para el desarrollo humano, la gobernabilidad democrática y el crecimiento económico sostenible en América Latina y el Caribe. Los tomadores de decisión se enfrentan hoy al desafío de construir políticas de seguridad y justicia que hagan frente a y al mismo tiempo prevengan las múltiples formas de violencia existentes. Sus profundas y complejas causas no pueden ser abordadas a través de intervenciones fragmentadas; estas requieren de un enfoque integral de seguridad ciudadana que establezca, fortalezca y proteja el orden civil democrático, elimine las amenazas de violencia en la población y permita una coexistencia segura y pacífica.

La seguridad ciudadana no es un fin en sí misma. Pero la manera como se aborda y se le da respuesta a esta problemática repercute en el tipo de desarrollo y la forma de gobierno que avanzamos. El trabajo conjunto y sostenido con instituciones nacionales, locales, académicas y de la sociedad civil deja al menos cuatro lecciones que se abordan en este documento: (i) la calidad de la información y los datos desagregados son fundamentales para tomar decisiones de política pública acertadas y abordar la violencia de manera efectiva. Estos datos deben ser transparentes y accesibles a la ciudadanía mediante herramientas tecnológicas innovadoras; (ii) soluciones populares y efectistas pueden mitigar síntomas, pero no resuelven problemas sociales complejos y pueden poner en riesgo la institucionalidad, la calidad democrática, las libertades y el desarrollo humano; (iii) la reducción sostenida de la incidencia delictiva se ha logrado principalmente mediante la implementación de políticas integrales de prevención, con un enfoque territorial y de derechos, y fortalecimiento institucional (pero esto no ha sido suficiente), y (iv) aunque el aumento de sanciones penales no es una solución efectiva para reducir la violencia, es importante promover la certeza de que los delitos reciben un castigo justo y proporcional respetando los derechos humanos y las leyes. Las soluciones a la seguridad ciudadana deben estar centradas en las personas y en políticas públicas que aborden las desigualdades sociales, el desempleo y mejoren la educación. La inversión social y prevención son fundamentales para contar con sociedades más justas, pacíficas y cohesionadas².

² PNUD (2023). Construyendo seguridad ciudadana desde una perspectiva centrada en las personas. Extraído de: www.undp.org/es/latin-america/blog/construyendo-seguridad-ciudadana-desde-una-perspectiva-centrada-en-las-personas.

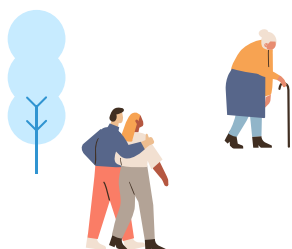
Desde el Sistema Iberoamericano, esta visión de la seguridad ciudadana como elemento fundamental del desarrollo permite aprovechar la cooperación internacional, incluyendo la cooperación Sur-Sur y triangular, para promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre ambos lados del Atlántico³ y abrir nuevas oportunidades para que los Estados diseñen políticas de seguridad más efectivas y adaptadas a las realidades locales.

La **Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes de Estado** representa un momento único para dialogar sobre estrategias integrales que refuercen la seguridad, la sostenibilidad y la equidad, a la vez que fortalecen la confianza ciudadana en las instituciones. En este marco, **PNUD**, **Fundación Carolina**⁴, **IDEA Internacional** y **SEGIB** se unen para compartir buenas prácticas que contribuyan a la construcción de una agenda renovada que ponga a las personas al centro de la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe.

³ SEGIB junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha desarrollado en 2024 dos talleres sobre la seguridad ciudadana en América Latina: Confianza y seguridad ciudadana en Latinoamérica: ¿qué institucionalidad es necesaria para enfrentar la criminalidad organizada? y Seguridad Ciudadana y Justicia en Latinoamérica.

⁴ La Fundación Carolina, junto con PRISA y CITpax realizó en junio de 2024 el seminario Los desafíos de la Seguridad en América Latina que inició un ciclo de trabajo vinculado a esta temática: www.fundacioncarolina.es/seminario-los-desafios-a-la-seguridad-en-america-latina

2. Contexto regional



La seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe es un desafío en constante evolución. Es el momento de redoblar esfuerzos y coordinar acciones para ir más allá de la reducción de delitos a través de la expansión de políticas públicas que beneficien a todas las personas, fortaleciendo la cohesión social y respetando el Estado de derecho, para asegurar la sostenibilidad.

En décadas anteriores, América Latina y el Caribe logró una importante reducción de la pobreza, una mejora del desarrollo humano y aumento del bienestar en múltiples dimensiones, acompañado de un proceso de consolidación democrática. Mientras la vida de las personas mejoró, la economía de sus países también creció, convirtiéndose en una región de renta media. Sin embargo, el progreso alcanzado se encuentra en un período de regresión. La región enfrenta desafíos estructurales persistentes y vulnerabilidades que son una barrera para el desarrollo sostenible, la gobernabilidad democrática y el crecimiento económico. Las profundas desigualdades y desprotección frente a la pobreza, agravadas por las crisis del COVID-19 y otros riesgos emergentes, han generado un clima de frustración, incertidumbre y desconfianza hacia las instituciones. El crecimiento económico desigual, la falta de empleo de calidad, la exclusión, los retos asociados a la movilidad humana, la precariedad educativa y las crisis climáticas están contribuyendo al aumento de la violencia y la inseguridad en la región.

América Latina y el Caribe continúa siendo la más violenta y desigual del mundo: registra un 28,9% de los homicidios globales concentrados en el 8,3% de la población mundial. Estas cifras prácticamente doblan el umbral de epidemia establecido por la OMS, situado en 10 homicidios por cada 100 mil habitantes. La última actualización del [Índice de Pobreza Multidimensional 2024](#)⁵, publicada conjuntamente por PNUD y la [Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford](#) (OPHI), aporta datos clave que detallan la interconexión entre los conflictos y la pobreza, evidenciando que la reducción de pobreza es más lenta en las zonas afectadas por conflictos –donde el grado es de por sí mayor que en zonas libres de violencia– lo que rezaga aún más a la población⁶.

⁵ UNDP (2024). 2024 Global Multidimensional Poverty Index (MPI). Poverty amid conflict. Extraído de: hdr.undp.org/content/2024-global-multidimensional-poverty-index-mpi#/indicies/MPI

⁶ PNUD/OPHI (2024). 1.100 millones de personas viven en situación de pobreza multidimensional y, de estas, casi 500 millones se encuentran en contextos de conflicto. Extraído de: www.undp.org/es/comunicados-de-prensa/1100-millones-de-personas-viven-en-situacion-de-pobreza-multidimensional#:~:text=La%20edici%C3%B3n%20de%202024%20del,para%20medir%20situaciones%20de%20conflicto.

Los delitos, impulsados en gran parte por el tráfico de armas y la disponibilidad de recursos ilícitos, siguen afectando a comunidades enteras y generan altos costos en términos de salud pública y cohesión social. La falta de oportunidades, sumada al crecimiento de redes de crimen organizado y economías ilícitas, continúa alimentando un clima de inseguridad y violencia que afecta de manera desproporcionada a grupos vulnerables, especialmente mujeres, niñas, jóvenes y comunidades indígenas⁷.

La violencia contra las mujeres y la violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos, ambientalistas y periodistas también se ha intensificado, lo que ha puesto en riesgo a la democracia y el desarrollo sostenible. Las mujeres y las niñas son uno de los grupos sociales proporcionalmente más afectados por la violencia en la región: además de las altas tasas de feminicidio, son víctimas de otros delitos de alto impacto, como la trata, la violencia sexual y la desaparición de personas. Además, las mujeres que trabajan en el espacio público son más propensas que los hombres a sufrir agresiones físicas y psicológicas, a lo que se suma el acoso en redes sociales⁸, limitando su participación en política⁹.

Por otro lado, la crisis climática, muy aguda en América Latina y el Caribe, incrementa la violencia en zonas de migración forzada. Estos eventos climáticos extremos influyen de forma especial en las decisiones migratorias, empujando a comunidades de zonas vulnerables a movilizarse hacia territorios donde también existe escasez de recursos, agravando las tensiones y empujando a estas comunidades a competir por ellos.

La suma de estos factores ha afectado de manera considerable a la confianza en las democracias de la región. Según datos del Latinobarómetro 2023¹⁰, solo el 28% de la población en América Latina y el Caribe está satisfecha con la democracia, una caída alarmante de 17 puntos porcentuales frente al 45% registrado en 2009.

⁷ Chinchilla, L. (2024). Seguridad Ciudadana y convivencia pacífica. Documento de trabajo preparado para los diálogos promovidos por CAF y PNUD (Borrador inédito).

⁸ IDEA Internacional (2023). Desinformación y discursos de odio. Amenazas digitales a la participación política de las mujeres en elecciones. Extraído de: www.idea.int/publications/catalogue/desinformacion-y-discursos-de-odio-amenazas-digitales-la-participacion?lang=es.

⁹ PNUD (2024). Construir sociedades democráticas fuertes: contrarrestar retrocesos y avanzar en la igualdad de género en América latina y el Caribe. Extraído de: www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/construir-sociedades-democraticas-fuertes.

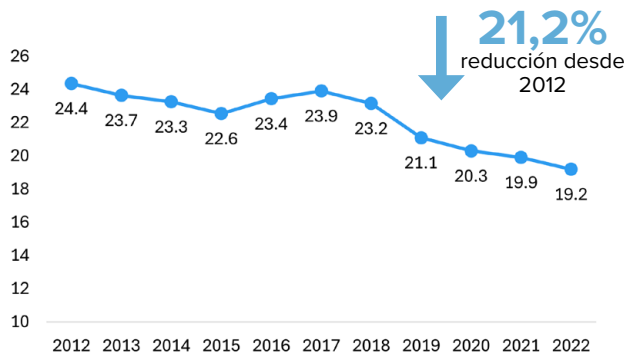
¹⁰ Corporación Latinobarómetro (2024). Informe 2023. Extraído de: www.latinobarometro.org/lat.jsp.

La inseguridad ciudadana en el centro de los principales retos de América Latina y el Caribe

6 de cada **10** personas cree que podría ser víctima de un crimen violento.

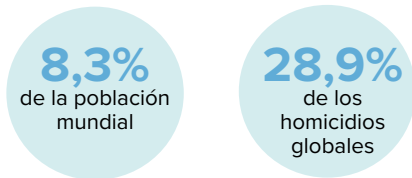
Fuente: Latinobarómetro (2023)

A pesar de importantes avances en la reducción de la violencia



Fuente: UNODC (2023), Infosegura (2023)

... la región continúa siendo la **más violenta y desigual del mundo**, registrando:



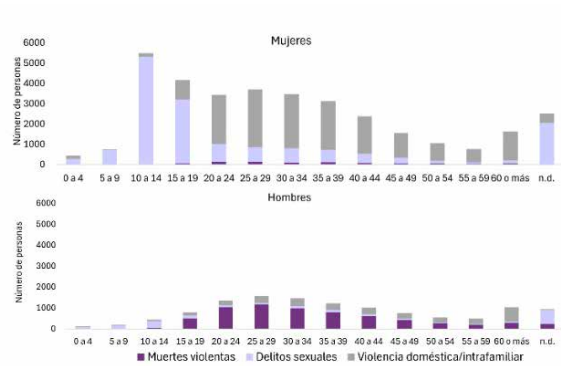
Fuente: Estimaciones propias a partir de UNDESA (2022; UNODC (2023)

Países con bajas tasas de violencia históricas están experimentando **incrementos en la tasa de homicidios** en años recientes:

- Ecuador (↑315%)
- Uruguay (↑30%)
- Chile (↑191%)
- Costa Rica (↑12%)

Fuente: Variación de homicidios desde 2015 a 2022. Elaboración propia a partir de información de UNDC (2024)

Las **mujeres** y las **niñas** son víctimas de múltiples formas de violencia a lo largo del ciclo de vida:



Fuente: Infosegura (2024)

Y se ha intensificado la **violencia selectiva** hacia:

- Representantes políticos (en especial mujeres)
- Líderes ambientales y sociales
- Periodistas
- Defensores de los DD.HH

La **crisis climática** que atraviesa la región agrava aún más la vulnerabilidad y el riesgo a la violencia.



Hoy, **6** de los **20** países con mayor índice de crimen organizado están en América Latina y el Caribe.

Fuente: índice Global de Crimen Organizado 2023 (GI-TOC)

Responder a estos desafíos requiere políticas integrales y coordinadas que aborden tanto la prevención de la criminalidad como la protección a las víctimas y el acceso a la justicia, asegurando el goce de los derechos y una respuesta efectiva contra la impunidad. Para alcanzar este objetivo, la colaboración y la cooperación estatal, transnacional y regional es clave para poner freno al avance del crimen organizado y asegurar un futuro seguro y justo para toda la región.

3. Buenas prácticas en seguridad ciudadana



Una política integral de seguridad ha de tener como núcleo duro las políticas públicas implementadas por la institucionalidad jurídico-penal y policial, desde los cuerpos y fuerzas de seguridad hasta los tribunales y fiscalías pasando por las instituciones penitenciarias, el control de fronteras y de los flujos financieros ilícitos. Las mejores prácticas en seguridad ciudadana contienen elementos fundamentales de política social, pero ninguna se puede entender sin una estrategia de seguridad y sus instituciones, sin las que no son viables la reducción del crimen y de la violencia. Experiencias en América Latina y el Caribe a lo largo de las últimas décadas muestran que las políticas públicas integrales de seguridad ciudadana han permitido lograr resultados sostenibles, contribuyendo a lograr una reducción del 21% en la tasa de homicidios desde 2012. Estas prácticas exitosas nos sugieren el camino hacia una seguridad ciudadana más inclusiva y equitativa.

✓ Políticas públicas integrales, basadas en evidencia, con enfoque territorial:

La seguridad ciudadana requiere un enfoque integral, articulado y fundamentado en evidencia, que combine prevención, control y persecución penal con atención y protección a las víctimas. Es esencial coordinar esfuerzos asegurando la participación de las instancias en los territorios, promoviendo la colaboración entre instituciones públicas de los distintos estamentos del Estado, la sociedad civil, el sector privado e involucrando a las comunidades. Esta coordinación es clave para asegurar una gobernanza efectiva, transparente y alineada con el Estado de derecho.

Los avances de los distintos sistemas que impulsa actualmente el Sistema Iberoamericano a través de la SEGIB y los Organismos Iberoamericanos Sectoriales contribuyen al fortalecimiento de políticas públicas de la región. Esta experiencia debe tenerse en cuenta al **abordar la seguridad ciudadana como un problema de desarrollo** e impulsar la vinculación de todos los actores sociales. El Sistema Iberoamericano debe revisar sus aportes en clave de seguridad para poner de manifiesto y en valor los instrumentos con los que cuenta y sus potencialidades para aportar en la agenda de una seguridad centrada en la protección integral de las personas, las comunidades y sus derechos.

La cooperación iberoamericana cuenta con una dilatada trayectoria en la promoción de la educación en todos sus niveles. Por ello, es indispensable contemplar el rol vital de la educación no solo en la formación en capacidades, sino en su papel protector de los niños y niñas y en su impacto social amplio para crear un espacio de seguridad sostenible.

✓ **Prevención de las violencias y fomento de la convivencia ciudadana:**

La prevención debe abordar las causas estructurales de la violencia, con énfasis en la protección temprana y la anticipación, enfocándose en las áreas geográficas y grupos poblacionales más vulnerables afectados por la inseguridad. Es fundamental brindar oportunidades de desarrollo a jóvenes en riesgo de exclusión social, evitando su captación por redes criminales mediante el acceso a educación, empleo y el fortalecimiento del tejido social. La violencia basada en género debe ser una prioridad. También la prevención de la violencia armada, combinando estas medidas con iniciativas comunitarias que promuevan la resolución pacífica de conflictos y campañas de sensibilización que desincentiven la cultura de la violencia. La coordinación entre actores locales, nacionales y regionales es fundamental para asegurar intervenciones coherentes y sostenibles.

El PNUD ha integrado un enfoque de género en sus políticas de prevención de violencia, desarrollando campañas y programas específicos para reducir la violencia contra mujeres y niñas, que son específicamente vulnerables al crimen organizado. En la región, esto ha resultado en un aumento de denuncias y en una mayor sensibilización, ayudando a desarticular redes de trata de personas y a proteger a víctimas de violencia de género.

✓ **Acceso a la justicia, reducción de la impunidad y procesos justos:**

Las políticas de seguridad deben poner un énfasis claro en la atención integral a las víctimas del delito. Un sistema de justicia fuerte y accesible es esencial para garantizar el acceso a la justicia para todas las personas y asegurar una seguridad efectiva. Las transformaciones institucionales del sector de justicia deben orientar sus esfuerzos a la efectividad, transparencia y celeridad de la gestión de los casos. El uso de tecnología y de la inteligencia artificial (IA) en la investigación criminal y la eficiencia en la sanción de delitos son fundamentales para ofrecer justicia pronta, oportuna y equitativa.

Algunas políticas de choque en materia de seguridad han explorado estrategias de combate frontal a la delincuencia, uso extendido de la prisión preventiva y detenciones masivas, seguidas por juicios penales grupales contra organizaciones delictivas y sus miembros. Los resultados a medio plazo se tendrán que analizar, pero destacan como primeros impactos la reducción de los índices de delincuencia y el significativo apoyo popular a estas medidas, aún en circunstancias que han suscitado reflexión desde el punto de vista de las garantías procesales y los derechos individuales. Hay una clara tensión entre la efectividad y los principios garantistas del proceso, que han sido desde tiempo atrás las dos facetas de las políticas de seguridad penal más difíciles de conciliar. Lo que aparece como conclusión evidente es que las políticas eficaces en materia de seguridad requieren reforzar y modernizar significativamente a las fuerzas de seguridad e instituciones del ámbito jurídico-penal, lo cual implica ya decisiones de jerarquía en materia presupuestaria y de inversión pública.

El acceso a la justicia para mujeres y niñas víctimas de violencia es esencial para romper los ciclos de impunidad y garantizar la protección de sus derechos. Los sistemas judiciales deben tratar estos casos con celeridad y sensibilidad, asegurando apoyo integral y evitando la revictimización. Es clave potenciar iniciativas de justicia abierta para ampliar el acceso a la justicia con servicios centrados en las personas, robustecer los conocimientos y las capacidades de operadores de justicia para continuar ampliando el acceso a la información y la transparencia de las instituciones de justicia.

✓ **Tecnología e innovación para la seguridad:**

El uso de análisis predictivo, sistemas de datos integrados y tecnologías para la gestión de información es clave para anticipar riesgos y formular respuestas adaptativas. La tecnología también fortalece la persecución penal, permitiendo identificar patrones delictivos, optimizar la inteligencia y mejorar la coordinación entre agencias para la prevención y control efectivo del crimen y de sus causas subyacentes asegurando derechos.

Hoy la región está innovando también en materia de seguridad apoyándose en una inversión creciente en seguridad digital, espoleada por la Inteligencia Artificial. Los países líderes en IA de la región, Brasil y México, invierten casi tanto en IA para la seguridad como para marketing. Los usos de la IA para seguridad incluyen tanto la seguridad ciudadana como la ambiental. Centrándonos solo en las instituciones del Estado, el uso público de la IA para orden público y seguridad representa el 18% del total en la región, solo superado por los usos de IA para asuntos económicos y servicios públicos generales, y muy por delante de sectores como la salud (11%) o la educación (10%). Esta es una senda de innovación que requerirá reflexión, diseño e inversión en el inmediato futuro¹¹.

✓ **Control del crimen organizado:**

El control de las estructuras de crimen organizado y las economías ilícitas es un desafío clave para la seguridad y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Estas redes criminales han logrado consolidar su poder mediante el control territorial, el tráfico de drogas, armas y personas, así como a través de actividades económicas ilegales como la minería y la tala ilegal. Para enfrentar este desafío, es fundamental implementar políticas públicas que combinen el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia con mecanismos de cooperación regional e internacional.

Asimismo, se debe promover la desarticulación de estas redes mediante el uso de inteligencia financiera y el control de activos, atacando las bases económicas que sostienen al crimen organizado. Un enfoque integral que contemple la prevención, persecución y sanción efectiva de estas estructuras es crucial para debilitar su influencia y proteger a las comunidades vulnerables. A su vez, una fuerte colaboración interinstitucional y comunitaria han probado su efectividad en múltiples contextos, ayudando a reducir la criminalidad y a fortalecer las capacidades estatales y comunitarias para resistir y combatir el crimen organizado.

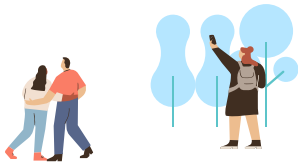
¹¹ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2024). Superar las trampas del desarrollo de América Latina y el Caribe en la era digital: el potencial transformador de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial (LC/CMSI.9/3). Extraído de: www.cepal.org/es/publicaciones/80841-superar-trampas-desarrollo-america-latina-caribe-la-era-digital-potencial.

✓ **Cooperación regional e internacional para la seguridad:**

Las alianzas regionales y los esfuerzos coordinados entre los países de América Latina y el Caribe son esenciales para enfrentar los desafíos transnacionales que afectan la seguridad en los territorios. El crimen organizado, la trata de personas, el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas no respetan fronteras, lo que requiere una respuesta que trascienda las capacidades individuales de los Estados. Un abordaje transnacional, que fomente la cooperación en áreas como el intercambio de información, la inteligencia financiera y la armonización de marcos legales, es crucial para desarticular las redes criminales y mitigar su impacto. La colaboración entre gobiernos, organismos internacionales y actores locales es clave para implementar soluciones efectivas que fortalezcan el control del territorio, protejan a las comunidades y promuevan un desarrollo seguro y sostenible en toda la región.

En este sentido, es importante considerar también la experiencia de la cooperación iberoamericana como modelo que incorpora como aspectos fundamentales el enfoque regional multidimensional y multiactor, la horizontalidad, el diseño flexible, y la priorización de las agendas nacionales con base en los objetivos de la Agenda 2030.

4. Contribuciones inspiradoras para avanzar en la construcción de paz, cohesión social y desarrollo



Lo que nos ayudó a avanzar hacia sociedades más cohesionadas, justas e inclusivas, nos impulsa; trabajemos juntos y con determinación para enfrentar los nuevos y complejos desafíos.

La transformación de Medellín:

Este es un ejemplo emblemático de cómo un enfoque integral en seguridad ciudadana, combinado con un fuerte liderazgo político y un profundo anclaje territorial, puede generar cambios significativos y sostenibles. A través de políticas públicas enfocadas en la convivencia y en las necesidades de la comunidad, Medellín logró reducir los altos índices de violencia que la habían caracterizado en décadas anteriores. Este logro fue posible gracias a una estrategia que incluyó una notable inversión en infraestructura social, programas de prevención del delito, educación y cultura ciudadana. La ciudad también modernizó sus fuerzas de seguridad y justicia, garantizando el respeto de los derechos humanos en sus acciones. Esta transformación de Medellín demuestra que, mediante la participación activa de la ciudadanía y una gestión coordinada, es posible construir una seguridad inclusiva que fortalezca el tejido social y fomente la paz en comunidades anteriormente afectadas por altos niveles de violencia.



El caso de Bogotá:

La capital colombiana, Bogotá, también se destaca como un ejemplo de renovación en términos de seguridad ciudadana mediante un enfoque integral y participativo. Con políticas centradas en las personas, basadas en la evidencia y apoyadas en la colaboración de la comunidad, Bogotá logró reducir significativamente la violencia que había afectado su vida urbana. Su estrategia incluyó la inversión en infraestructura social y programas de prevención del delito, así como el fomento de una cultura ciudadana de respeto y convivencia.

Además, Bogotá modernizó sus fuerzas de seguridad y justicia, operando bajo un marco de respeto a los derechos humanos. Este proceso de transformación en la capital demostró que, con un liderazgo firme y la participación activa de la ciudadanía, es posible construir una seguridad sostenible, mejorar la percepción de seguridad y fortalecer la cohesión social. La experiencia de Bogotá ha sido una referencia para muchas ciudades, que encuentran en su modelo un ejemplo de cómo un enfoque integral y colaborativo puede construir comunidades más justas y pacíficas.

Las políticas públicas de seguridad ciudadana basadas en evidencia han sido el núcleo del Proyecto Regional Infosegura¹², implementado en Centroamérica y República Dominicana por el PNUD en alianza con USAID y en articulación con las instituciones nacionales. Durante una década, el proyecto ha colaborado con más de 90 instituciones estatales y 60 organizaciones de la sociedad civil, promoviendo la recolección, análisis y uso de información para la gestión pública. Infosegura ha contribuido al desarrollo de capacidades técnicas y al uso de herramientas tecnológicas para analizar el contexto de inseguridad y vulnerabilidades, proporcionando una base sólida para la toma de decisiones en políticas de prevención y atención de la violencia y la criminalidad.

El proyecto ha facilitado el diseño de 120 políticas y estrategias de seguridad, con un enfoque de género, centrado en las personas y anclaje territorial. Aprovechando la transformación digital y promoviendo el uso de la tecnología para mejorar la seguridad ciudadana y la prevención de la violencia, Infosegura contribuyó al desarrollo de herramientas de análisis automatizado de datos, herramientas digitales y chatbots basados en inteligencia artificial, que fortalecen las respuestas institucionales a nivel local, nacional y regional¹³. El proyecto también ha contribuido a construir ecosistemas de datos y plataformas digitales que integran información clave, facilitando la toma de decisiones basadas en evidencia. Impulsó también una innovadora estrategias de comunicación para el intercambio y difusión de información continua sobre el contexto de la seguridad ciudadana

¹² Para conocer más del Proyecto Regional Infosegura consultar: infosegura.org.

¹³ Chatbot Sara: chatbotsara.org.

en la región¹⁴. La iniciativa ha promovido además la articulación de una comunidad de práctica y aprendizaje y ha consolidado la Red de Conocimiento CONOSE, integrada por centros de pensamiento y universidades regionales, que colaboran en el desarrollo de investigación, formación y transferencia de capacidades¹⁵. Durante una década de implementación, la región registró una reducción del 49,6% en la tasa de homicidios y una disminución del 31,5% en la tasa de femicidios. Estos avances fueron acompañados por un aumento en la confianza de la población en la policía y una mejora en la percepción de seguridad en varios países, según datos del Latinobarómetro.

Para hacer frente a las expresiones de violencia y anticipar los riesgos que representa la combinación de mecanismos de gobernanza criminal y economía ilegal a nivel comunitario y local, se han utilizado herramientas de gestión de evidencias para la priorización de zonas geográficas y grupos poblacionales más afectados por la incidencia delictivas y vulnerabilidades económicas y sociales. Honduras, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, cuentan con Índices de Priorización territorial¹⁶, en Brasil se implementó el Atlas de la Violencia, en Panamá se esbozó el Índice de Pobreza Multidimensional corregido por seguridad, y se han realizado actualizaciones periódicas de la situación de la violencia contra las mujeres y niñas. Esta información es crucial para diseñar políticas de seguridad ciudadana y para identificar la presencia institucional del Estado y redireccionar su impacto sobre el desarrollo humano.

Los países de la región también han desarrollado destacados esfuerzos orientados a la prevención, atención, protección y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. En alianza con los gobiernos de Centroamérica y República Dominicana, InfoSegura ha impulsado la creación de políticas públicas basadas en evidencia, fortaleciendo la gestión de información con perspectiva de género. El proyecto ha potenciado el uso de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para la prevención y atención de la violencia, con soluciones innovadoras como los chatbots Sara y Paco, enfocados en la asistencia a mujeres en situación de violencia y en la promoción de nuevas masculinidades, respectivamente. InfoSegura también ha desarrollado múltiples campañas de comunicación y sensibilización para reducir la violencia de género, contribuir con los gobiernos para responder a este problema y aumentar las denuncias, fomentando una mayor participación de la ciudadanía y fortaleciendo la colaboración entre gobiernos y sociedad civil. Por su parte, la Iniciativa Spotlight, impulsada por las agencias del Sistema de Naciones Unidas y la Unión Europea, contribuyó a la prevención, atención a víctimas y reparación del daño. Los esfuerzos nacionales con el apoyo de ambas iniciativas representan un compromiso regional por avanzar hacia sociedades seguras, justas e inclusivas, donde todas las personas puedan vivir sin temor y desarrollar plenamente su potencial.

¹⁴ Infosegura (2024). Dashboard con datos sobre seguridad ciudadana, violencia contra las mujeres y las niñas y factores asociados en Centroamérica y República Dominicana. Extraído de: infosegura.org/dashboard; Infosegura (2024). Análisis periódicos y sistemáticos por país y para la subregión. Extraído de: infosegura.org/publicaciones

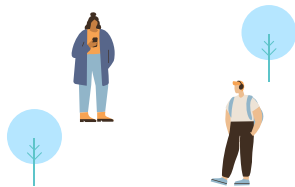
¹⁵ Infosegura (2024). 10 años de logros en seguridad ciudadana. Extraído de: infosegura.org/region/10-anos-de-logros-seguridad-ciudadana.

¹⁶ Infosegura (2024). Índices de priorización territorial: **Guatemala**. Extraído de: infosegura.org/noticias/indice-de-priorizacion-territorial-la-nueva-herramienta-implementada-por-guatemala-para-la-creacion-de-politicas-publicas

El Salvador. Extraído de: www.seguridad.gob.sv/dia/herramientas-de-priorizacion.

República Dominicana. Extraído de: www.undp.org/es/dominican-republic/noticias/nuevas-herramientas-de-interior-y-policia-permiten-acceso-manejo-de-estadisticas-y-comprension-de-la-seguridad-ciudadana **Honduras**. Extraído de: www.infosegura.org/noticias/indice-de-priorizacion-territorial-una-nueva-herramienta-para-analisis-temas-de-seguridad-ciudadana-convivencia-honduras#:~:text=El%20%C3%8Dndice%20de%20Priorizaci%C3%B3n%20Territorial,de%20seguridad%20ciudadana%20y%20convivencia.

5. Mirando hacia el futuro



Es momento de redoblar esfuerzos y actuar juntos para construir hoy la seguridad y justicia que aseguren un futuro sostenible para todas las personas de nuestra región.

Áreas de oportunidad para una seguridad ciudadana sostenible e inclusiva:

A medida que avanzamos hacia el futuro, es fundamental reforzar el enfoque integral de seguridad ciudadana sostenible e inclusiva, abordando los desafíos estructurales y emergentes de forma coordinada. Entre las áreas clave de oportunidad, destaca la integración de tecnología e innovación, el fortalecimiento de alianzas público-privadas y la promoción de políticas de seguridad centradas en las personas, que prioricen la igualdad de género, los derechos humanos y la cohesión social. La mejora en la recolección y análisis de datos sigue siendo esencial para asegurar que las decisiones se basen en evidencia confiable, permitiendo ajustar las estrategias según las necesidades locales y los cambios en los contextos.

Llamado a la acción:

Es momento de comprometerse a acciones más rápidas y efectivas que respondan a las necesidades urgentes de seguridad en la región. Los gobiernos, el sector privado, la academia, la sociedad civil y la comunidad internacional deben trabajar juntos para consolidar los avances alcanzados, crear instituciones más efectivas y reforzar la gobernanza efectiva.

La seguridad, comprendida como un problema de desarrollo, requiere de un abordaje multidimensional que puede ser impulsado desde el espacio del sistema iberoamericano, cuyas experiencias están capacitadas para dotar de rigurosidad y eficiencia las iniciativas que se diseñen para prevenir, anticipar y enfrentar los desafíos que esta supone.

PNUD, Fundación Carolina, IDEA Internacional y SEGIB proponen redoblar esfuerzos a través de un enfoque integral y coordinado a nivel estatal, transnacional y regional como pilar fundamental de una agenda renovada de desarrollo y democracia en América Latina y el Caribe, con las personas en el centro de la seguridad, asegurando un futuro más seguro, inclusivo y próspero para todas las personas.

6. Anexo 1

La seguridad ciudadana: una agenda que expande la esfera pública desde 1991



Revalorizar el paradigma de seguridad ciudadana centrada en las personas es crucial; romper el bloqueo al desarrollo para juntos hacer frente a los actuales y complejos desafíos que demandan redoblar esfuerzos para asegurar respuestas efectivas frente a la violencia y el temor, encaminadas a la construcción de una paz sostenible, duradera.

El Pacto del Futuro, firmado recientemente por los jefes y jefas de Estado en la sede de las Naciones Unidas, marca un hito en la reafirmación del compromiso hacia un mundo pacífico, justo, igualitario e inclusivo. El proceso histórico de las últimas décadas ha consolidado un marco de conversación abierto, que ha sentado las bases para la inclusión de los temas de seguridad en la agenda política y programática de América Latina y el Caribe y ha permitido que los desafíos en materia de seguridad ciudadana se aborden con una perspectiva integral y centrada en las personas, reforzando la necesidad de construir sociedades más seguras y cohesionadas.

Desde 1991, en nuestra región se impulsan espacios políticos, temáticos y programáticos que han permitido mover la agenda regional y nacional, constituyéndose en referencias globales. La Declaración de Guadalajara, México, trazó los retos y oportunidades para alcanzar una región pacífica y plena en la primera reunión de jefas y jefes de Iberoamérica. Los avances en la consolidación de la seguridad pública regional se afianzaron con las Reuniones de ministros y ministras de Seguridad. En este proceso, organizaciones como IDEA Internacional, Fundación Carolina y PNUD han apoyado mediante la creación de marcos conceptuales y la adaptación de conocimientos a los nuevos desafíos emergentes. Su enfoque ha permitido enfrentar las complejidades de las estructuras criminales y la evolución del crimen organizado, fomentando conversaciones necesarias para abordar estos problemas de forma eficaz¹⁷.

Los avances en estas áreas deben considerar:

- ✓ **Empoderar a las personas**, en especial a los grupos más vulnerables y excluidos, para que participen activamente en la construcción de sociedades más justas, inclusivas y seguras. Es fundamental fortalecer la capacidad de agencia de estos colectivos para garantizar que las políticas de seguridad respondan a sus necesidades específicas. Esto pasa por una mayor inversión en la agenda social (salud, educación y empleo) sin la que no es posible plantear soluciones consistentes y viables a la inseguridad¹⁸.

¹⁷ IDEA Internacional y el Diálogo Interamericano (2024). El desafío de la seguridad para las democracias en América Latina. Extraído de: www.thedialogue.org/events/el-desafio-de-la-seguridad-para-las-democracias-en-america-latina/?lang=es.

¹⁸ Rodríguez-Pinzón, E. y Mila-Maldonado, A. (2024). “La seguridad en América Latina: Desafíos actuales y perspectivas futuras”. Análisis Carolina n°12. Madrid. Fundación Carolina.

- ✓ **Renovar y fortalecer el Estado de derecho**, consolidando las capacidades de los gobiernos y sus instituciones, asegurando que estén preparadas para enfrentar los desafíos presentes y futuros en materia de seguridad y justicia, con un estricto respeto a los derechos humanos.
- ✓ **Impulsar la colaboración y articulación institucional a nivel interinstitucional, territorial, nacional y transnacional**, para que las respuestas sean efectivas y coordinadas, es esencial superar las fragmentaciones que obstaculizan la cooperación entre distintos niveles de gobierno. Esto debe realizarse con base en evidencia y datos concretos.
- ✓ **Promover una visión integral y sostenible** en las políticas de seguridad, que aborde tanto los problemas inmediatos como las causas estructurales de la violencia. Solo a través de un enfoque integral y una implementación coordinada será posible generar entornos más seguros y garantizar el Estado de derecho y el bienestar de todas las personas.

Estos principios fundamentales se sustentan en los siguientes ejes:

- ✓ **Centrado en las personas:** Priorizar las necesidades de justicia y seguridad de las personas, asegurando que sus derechos humanos sean el pilar de cualquier política de seguridad.
- ✓ **Basado en los derechos humanos:** Garantizar un contexto de paz que promueva la dignidad humana, la igualdad y el acceso a la justicia.
- ✓ **Con perspectiva de género:** Asegurar que las políticas de seguridad ciudadana respondan a las problemáticas y necesidades específicas de las mujeres y las niñas, quienes enfrentan múltiples formas de violencia a lo largo de sus vidas.
- ✓ **Enfoque basado en evidencia:** Tomar decisiones estratégicas fundamentadas en datos, anticipando los factores que perpetúan la inseguridad y analizando las causas profundas de las desigualdades y la exclusión, con el fin de diseñar políticas más justas, eficaces y adaptativas.
- ✓ **Participación inclusiva:** Involucrar a todos los sectores de la sociedad en el diseño y ejecución de políticas públicas. Ejemplos de ello son la academia, el sector público, el sector privado, así como los medios de comunicación, las fuerzas de seguridad y el tercer sector, entre quienes se deben establecer diálogos bajo el lema del cuidado de la democracia como bien común¹⁹.
- ✓ **Innovación y soluciones digitales inclusivas:** Apoyar la transición digital de las instituciones del sector de seguridad. Aprovechar las herramientas tecnológicas para mejorar la eficacia de las políticas y facilitar el acceso a la información.
- ✓ **Orientado a cambios transformacionales:** Asegurar que las políticas de seguridad se articulen con las de desarrollo, para incidir en las causas estructurales de la violencia e impulsar cambios sostenibles.

¹⁹ Rodríguez, E. (2024). Érika Rodríguez, directora de la Fundación Carolina: “Los latinoamericanos están unidos bajo el paraguas del miedo”. Extraído de: elpais.com/chile/2024-08-29/erika-rodriguez-directora-de-la-fundacion-carolina-los-latinoamericanos-están-unidos-bajo-el-paraguas-del-miedo.html.

La seguridad ciudadana, concebida como un bien público, exige la observancia de estándares democráticos y participativos para garantizar su sostenibilidad y legitimidad. En línea con estos principios, y apoyándose en los esfuerzos nacionales que han impulsado reformas en los marcos normativos, diseños institucionales, formulación de políticas y procesos de formación de personal, se han logrado avances significativos en la gestión del sector de seguridad. Además, los países de la región han acumulado una valiosa experiencia en la prevención y control de diversas formas de violencia y delincuencia, tanto en el ámbito nacional como subnacional. No obstante, para avanzar hacia una gestión de la seguridad ciudadana más efectiva, inclusiva y sostenible y apegada a derechos, los desafíos actuales exigen redoblar estos esfuerzos en aras de consolidar los avances alcanzados y responder a las nuevas dinámicas emergentes.



Secretaría General
Iberoamericana
Secretaria-Geral
Ibero-Americana

